



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2021-00196-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: VIVIANA LORENA PATAcón LOZANO
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS
ORDINARIO: 110013335026-2012-00100-00

La parte ejecutante, a través de apoderado judicial, ha solicitado a este juzgado, que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**, con el fin de obtener el pago de los intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida en el proceso con radicado 110013335026-2012-00100-00, por este estrado judicial y que fuera confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la suma total de **SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$71.988.088) m/cte.**

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto. Para el efecto se analizará lo siguiente:

A. PRETENSIONES

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

***“PRIMERA:** Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra de BOGOTÁ D.C – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, y a favor de la señora VIVIAN LORENA PATAcón LOZANO, por la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIETOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$23.469.537) Mcte., por concepto de capital pendiente de cancelar por la UAECOB, a liquidar, reliquidar y ordenar pagar, en forma parcial e incompleta, en primer lugar por el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2008 y el 31 de enero de 2017, la suma de ochenta y seis millones ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve pesos (\$86.082.279) M/cte., dando alcance a la Resolución No. 609 del 23/09/2016 y en segundo lugar a reliquidar y ordenar pagar igualmente en forma parcial e incompleta, por*

el período comprendido entre el 01 de marzo de 2007 y el 31 de enero de 2019, la suma de veinte millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos trece pesos (\$20.388.213) M/cte., de los cuales “18.782.688 corresponden a capital por horas extras y recargos y \$1.605.525 a cesantías; dando alcance a la Resolución No. 609 del 23/09/2016; desconociendo con los dos pagos mencionados, que la liquidación conforme con los parámetros de las sentencias de primera y segunda instancia que se ejecutan, entre el 07 de septiembre de 2008 al 31 de enero de 2019, es de ciento veintinueve millones novecientos cuarenta mil veintinueve pesos (\$129.940.029) M/cte., capital indexado, liquidación que se allega, y que fue realizada conforme con lo ordenado en la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de marzo de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicado No. 11001333502320120010001, demandante VIVIAN LORENA PATACÓN LOZANO, sentencia ejecutoriada el 28 de abril de 2016.

SEGUNDA: *Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar la suma de dinero de veintinueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos (\$29.488.049) Mcte., por los intereses moratorios, sobre el capital pagado de ochenta y seis millones ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve pesos (\$86.082.279) Mcte., desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, es decir, desde el 29 de abril de 2016, ya que la fecha de ejecutoria de dicha sentencia fue el 28 de abril de 2016, hasta la fecha del pago parcial e incompleto mencionado, es decir hasta el 14 de julio de 2017, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda.*

TERCERA: *Incluir también en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar la suma de dinero de diecinueve millones treinta mil quinientos dos pesos (\$19.030.502) Mcte., por los intereses moratorios, sobre el segundo pago de la segunda liquidación, capital pagado de veinte millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos trece pesos (\$20.388.213) M/cte., de los cuales \$18.782.688 corresponden a capital por horas extras y recargos y \$1.605.525 a cesantías, desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, es decir, desde el 29 de abril de 2016, ya que la fecha de ejecutoria de dicha sentencia fue el 28 de abril de 2016, hasta la fecha de este pago parcial e incompleto, es decir, hasta el 9 de octubre de 2019, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda.*

CUARTA: *Incluir también, en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar los intereses moratorios sobre el capital insoluto o pendiente de cancelar, es decir, sobre VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIETOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$23.469.537) Mcte; desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, es decir, desde el 29 de abril de 2016, hasta la fecha de pago total de la obligación, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda.*

QUINTA: *Condenar en costas y en agencias en derecho a la Entidad demandada, teniendo en cuenta que la entidad se negó sin justificación legal alguna, al reconocimiento y pago oportuno, de la totalidad de los derechos del ejecutante, ordenados en las sentencias que se ejecutan, pese a las reiteradas peticiones en*

ese sentido; acorde con lo consagrado en los artículos 188 y 306, de la Ley 1437 de 2011; en concordancia con el artículo 365 y 366, del Código General del Proceso y demás normas vigentes.”

B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Destaca el abogado de la parte actora, que la sentencia proferida por este Estrado Judicial el 13 de agosto de 2014, confirmada parcialmente y modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quedó ejecutoriada el **28 de abril de 2016**, y la cual ha sido incumplida por la entidad demandada, en razón a que se ha negado a dar estricto cumplimiento a la misma, generando de esa manera los intereses moratorios de que trata el artículo 192 del CPACA.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán la reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación a las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales, lo siguiente:

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros a tener en cuenta en casos como el presente:

1. Solicitud: A través de memorial radicado por el abogado **JORGE ELIECER GARCÍA MOLINA** en representación de la señora **VIVIAN LORENA PATACÓN LOZANO**, solicitó al Juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**, con el fin de obtener el pago de los intereses ordenados en las sentencias proferidas por este Despacho y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez el artículo 192 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso segundo establece:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas en principio el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva, es decir dicho término inicia luego de vencidos los 10 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.**

Así las cosas, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 07 de julio de 2021 (fl.1º), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del 28 de abril de 2016.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado, se encuentra la sentencia proferida por este Juzgado el 13 de agosto de 2014 (Fls. 23-45), y por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “C”, M.P. Samuel José Ramírez Poveda, el 31 de marzo de 2016 (Fls. 55-79).

Seguidamente, debe tenerse como tal la Resolución 609 del 23 de septiembre de 2016, emanada de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, en virtud de la cual se dio cumplimiento al fallo antes aludido, aunque de manera parcial en consideración de la parte ejecutante (fls. 95-99).

Conforme a lo anterior, el Despacho considera que la sentencia proferida, conjuntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos para el cumplimiento de la sentencia, configuran un título ejecutivo, por darse

cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende la obligación hoy reclamada por la ejecutante, que corresponde a la liquidación de los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, siendo una de las órdenes impartidas por este estrado judicial y que no fue cumplida por el ente administrativo ejecutado.

En este sentido, se observa que el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma aplicable para el presente asunto, en relación con la efectividad de las condenas contra entidades públicas, dispone:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.”

Así mismo, sobre la incidencia del artículo 192 del C.P.A.C.A en el cumplimiento de las sentencias condenatorias por parte de entidades estatales, el H. Consejo De Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil – Consejero Ponente: Álvaro Amén Vargas, en providencia del 29 de abril de 2014, manifestó:

(...)

“4. El pago de sentencias y conciliaciones y la tasa aplicable en materia de intereses de mora según la Ley 1437 de 2011.

En el Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011, en los artículos 192, 194 y 195 del Título V, referente a la demanda y proceso contencioso administrativo, Capítulo VI, correspondiente a la sentencia, teniendo en cuenta que el compromiso de las entidades públicas de honrar los créditos judicialmente reconocidos en sentencias y providencias en firme no respondía en debida forma a los principios de eficiencia, economía y eficacia, se replanteó la regulación para el cumplimiento de las sentencias y conciliaciones por parte de las entidades públicas, así:

a) Del cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas

El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, preceptúa:

"ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes."

La norma en síntesis regula los siguientes aspectos: i) **la forma como se materializa una condena cuando no implica el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero;** ii) **el plazo de diez meses para cumplir las condenas que impongan a entidades públicas el pago o devolución de una suma de dinero y su trámite contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia;** iii) **el momento a partir del cual la condena o conciliación extrajudicial devengará intereses moratorios, esto es, a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto aprobatorio del mecanismo alterno de solución de conflictos;** iv) **la audiencia de conciliación a celebrar en el evento en que se profiera en primera instancia una sentencia condenatoria y esta sea apelada;** v) **la mora creditoris predicable a los**

beneficiarios cuando estos no acuden dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia, a la entidad responsable para hacerla efectiva o no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado según el caso, eventos en los cuales cesará la causación de intereses moratorios y vi) las consecuencias del incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos, esto es, la procedencia de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

De otra parte, cabe observar que en relación con el cumplimiento de las condenas que no implican el pago o devolución de una suma de dinero, que es el primer aspecto regulado en el artículo precitado, el nuevo código mantiene, en su artículo 192, una regla similar a la que preveía el Decreto Ley 01 de 1984 en su artículo 176. Estas normas presentan similitud en tres aspectos: i) el deber que se impone a las autoridades de cumplir con las condenas impuestas en su contra; ii) la orden según la cual la respectiva entidad condenada "adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento" y iii) el término de treinta (30) días para cumplir con las condenas. Sin embargo, estas dos disposiciones no son idénticas, pues entre una y otra existe una diferencia importante, que consiste en que la norma del nuevo código establece claramente las tres circunstancias descritas para una sola especie de condenas, esto es, únicamente aquellas que no impliquen el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, mientras que la del Decreto Ley 01 de 1984 no hacía ninguna distinción, es decir, que podría entenderse que aplicaba a todo tipo de condenas.

Negrilla y subraye fuera del texto

Aunado a lo anterior, se tiene que el numeral 4° de la parte resolutive de la sentencia proferida por este estrado judicial y confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impartió la orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en los artículos 192 y ss del C.P.A.C.A.

La decisión judicial de segundo grado fue debidamente notificada a las partes, quedando ejecutoriada el 28 de abril de 2016, tal y como se puede observar en la constancia de entrega de la primera copia que presta mérito ejecutivo de las sentencias de primera y segunda instancia, expedida por la secretaría de turno, visible a folio 80 del plenario digital.

La Unidad Administrativa Especial De Cuerpo Oficial De Bomberos, profirió la Resolución 609 del 23 de septiembre de 2016, por medio del cual dio cumplimiento a las sentencias ya identificadas, cuya decisión administrativa fue que, por medio de la Subdirección de Gestión Humana, se realizara la reliquidación en los términos señalados en las sentencias judiciales, y posterior pago respectivo, vislumbrando que en la misma no se refleja el pago de los intereses moratorios.

Así mismo, se establece que la parte actora solicitó el cumplimiento de la providencia el 10 de agosto de 2016, es decir, dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y debido a ello fue expedido el acto administrativo de cumplimiento.

Adicionalmente, la entidad demandada efectuó una liquidación entre el mes de septiembre de 2008 a febrero de 2017, por un valor de \$86.082.279 pesos, por concepto de asignaciones salariales, horas laboradas, horas extras, recargos, entre otras, incluyendo en las mismas la prima especial, cesantías e indexación, sin reflejarse el pago de intereses moratorios.

Por lo expuesto, el Despacho Librará mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos.

Debe recordar el contenido del enunciado normativo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, que consagra:

“Artículo 1653. Imputación del pago a intereses. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.”

Conforme a la normatividad referida, por regla general no puede imputarse pago a capital si aún no se han satisfecho los intereses, excepto que el acreedor los consienta y/o permita.

Ahora bien, se tiene que el monto solicitado por la ejecutante asciende a la suma de **SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$71.988.088) m/cte.**, conforme a la liquidación expuesta por el ejecutante, **sin que necesariamente sea esta el valor por cancelar**, toda vez que ello está sujeto a determinación precisa de la solicitud de cumplimiento a la sentencia, las excepciones propuestas por la demandada y a la liquidación de crédito.

A su vez, se precisa que los valores ordenados se encuentran comprendidos desde el **07 de septiembre de 2008**, en virtud de lo dispuesto en la sentencia proferida por este Despacho Judicial el **13 de agosto de 2014**, y parcialmente modificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando a la demandada a reconocer, liquidar y pagar las horas extras y que excedieron la jornada máxima de 44 horas semanales, de conformidad con el Decreto 1042 de 1978, con la inclusión de la **totalidad** de los factores que en dicha providencia se indicaron y bajo los parámetros que en la misma se establecieron.

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 430 del Código General del Proceso, el Despacho dispondrá librar mandamiento ejecutivo a favor de la señora **VIVIAN LORENA PATAcón LOZANO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS** por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$71.988.088) m/cte.**

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor de la señora **VIVIAN LORENA PATACÓN LOZANO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS** por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$71.988.088) m/cte.**, por concepto de intereses moratorios reclamados en la presente ejecución.

SEGUNDO: Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2° del decreto 2867 de 1989, se fija la suma de **SESENTA MIL PESOS (\$60.000,00.) m/cte**, que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, **en la CUENTA CORRIENTE ÚNICA NACIONAL No. 3-082-00-00636-6 del Banco Agrario “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS –CUN”.**

TERCERO: Notifíquese esta providencia personalmente a la entidad demandada, **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**, en los términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

CUARTO: Fíjese a la entidad demandada, el término de cinco (5) días para que cumpla con la obligación de efectuar el pago de los intereses moratorios, reconocidos en la sentencia que constituyen título ejecutivo en el presente proceso (Artículo 431 C.G.P.).

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la demandada podrá proponer excepciones de mérito, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 442 del C.G.P.

SEXTO: Notifíquese personalmente al señor representante del Ministerio Público, en los términos del artículo 199 del Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los términos del artículo 199 del Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

En el evento en que la agencia decida intervenir en el proceso, el mismo se suspenderá en los términos del artículo 611 del Código General del Proceso.

OCTAVO: Se reconoce personería jurídica al abogado **JORGE ELIECER GARCÍA MOLINA**, identificado con cédula de ciudadanía número

11.298.767 de Girardot y portador de la tarjeta profesional 51.415 del C. S. de la J., como apoderado principal del demandante, en los términos y para los fines del poder visible a folio 22 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

20

Firmado Por:

Andres Jose



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **11 DE AGOTO DE 2021**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA

Quintero Gnecco

**Juez Circuito
Sala 026 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
855eccec8f7ebb5553fdd1b9d7cbc0a1dd67a8e9aaac57d022d4f5b7e1834117
Documento generado en 10/08/2021 04:08:36 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>